**ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
EN LA AMERICA ESPAÑOLA:
UNA MIRADA A TRAVÉS DEL LITIGIO
DE UNA CASA TIENDA EN LA CARACAS
DE 1760**

EDUARDO WALLIS BRANDT*

RESUMEN: EN UN EXPEDIENTE INÉDITO NOS ENCONTRAMOS CON UN PROCESO JUDICIAL CIVIL QUE PRETENDE LA NULIDAD DE LA VENTA DE UN INMUEBLE, DENOMINADO CASA TIENDA*, HECHA POR EL ALBACEA SOBRE EL BIEN DE UN MENOR, EN LA CIUDAD DE CARACAS DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII. LA DECISIÓN VERSA ENTRE LA NULIDAD DE LA VENTA POR LA INCAPACIDAD DEL ALBACEA, IMPLICÁNDOSE LA RETROACTIVIDAD O, SI LA TRANSMISIÓN SE HIZO DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL TESTAMENTO, DE BUENA FE Y NACIÓ UN DERECHO PARA LOS NUEVOS PROPIETARIOS QUE VA A SER RECONOCIDO EN EL SENTENCIADOR COLONIAL INDIANO.

PALABRAS CLAVES: TESTAMENTO, ALBACEA, NULIDAD, BIENES DE MENORES.

A VISION THROUGH THE LEGAL PROCESS OF A PROPERTY IN THE CARACAS OF 1760

ABSTRACT: IN AN UNPUBLISHED FILE WE FIND A CIVIL JUDICIAL PROCESS THAT SEEKS THE NULLITY OF THE SALE OF A PROPERTY, CALLED "CASA TIENDA" LEGACY MADE BY THE TESTAMENTARY EXECUTOR ON THE PROPERTY OF A MINOR, IN THE CITY OF CARACAS, DURING THE SECOND HALF OF THE EIGHTEENTH CENTURY. THE DECISION IS BETWEEN THE NULLITY OF THE SALE DUE TO THE INCAPACITY OF THE EXECUTOR, IMPLYING RETROACTIVITY OR, IF THE TRANSFER WAS MADE IN ACCORDANCE WITH THE CONTENT OF THE WILL THEN A RIGHT WAS BORN FOR THE CHAIN OF NEW OWNERS AND WILL BE RECOGNIZED BY THIS COLONIAL SENTENCER.

KEYWORDS: WILL, EXECUTOR, ANNULMENT, PROPERTY OF MINORS.

* Casa-tiendas eran una suerte de negocios particulares que expedían diversidad de productos siendo la mayoría de fabricación casera: comida y artículos manufacturados. Aunque debían tener licencia, muchas no las tenían y eran vistas con recelo por otros competidores y por las autoridades a los fines de pagos de impuesto. Existieron aproximadamente 52, todas ubicadas a menos de cuatro cuadras de la Catedral. Celia Tacoronte. *La Parroquia Catedral de Caracas y sus pobladores. Un estudio a partir de la Matricula de 1787*. (UCAB. Caracas, 2017).

INTRODUCCIÓN

CARACAS, ESPAÑA, INDIAS COLONIALES

Antes de entrar a analizar un juicio ocurrido en aquella Caracas colonial de mediados de los setecientos, podríamos preguntarnos cuales eran los parámetros de seguridad jurídica y bajo qué reglas se procesaban los reclamos civiles; porque a principios del siglo, lo que hoy es Venezuela, era un espacio territorial sin mucha importancia a los efectos de su participación como provincia americana. Es una ciudad donde la población se duplica en la primera mitad del siglo y se vuelve a doblar en la segunda; con este incremento, también prosperan los juicios civiles. La posibilidad de dirimir los conflictos entre los privados frente a una autoridad competente, es un buen signo de civilización que impulsará el crecimiento y el desarrollo en la creciente provincia. Ahora bien, ¿estaba este incremento de la actividad judicial relacionado directamente con el aumento de la población? Para la historiadora investigadora Dora Dávila¹, no está tanto relacionado directamente con el aumento de la población sino con la credibilidad en el sistema por parte de esa sociedad que reconoce que lo puede aprovechar. De tal manera, si el establishment puede garantizar la solución de los conflictos imponiendo unas reglas iguales para todos, que se desarrollen dentro de un sistema suficientemente organizado, los privados lo invocaran a los fines de tener mas y mejor paz social.

Iniciando el siglo, Felipe V, primer Borbón, después de la guerra de sucesión, implementa un modelo autocrático bajo el poder real soberano. A los reinos enfrentados le son derogados los regímenes forales y sale

¹ Dora Dávila Mendoza. *Alí López Bohórquez. El Rescate de la autoridad colonial de Venezuela. La Real Audiencia de Caracas (1786-1810)*. (Centro Nacional de Historia. ANH, Boletín Nro. 372, 2009). p. 199.

triumfante el reino de Castilla. Felipe V abolió los fueros de Aragón y Valencia que conferían un gran poder a la nobleza frente al rey. Como consecuencia, se uniforman las mismas Leyes, Fueros y Costumbres según las leyes de Castilla, completándose una justificación política y jurídica para la unión de todos los reinos de España. Dicta los decretos unificadores castellanos y este es el nacimiento del Derecho Real. Esta monarquía absoluta se ve reflejada cuando el monarca absoluto puede cambiar decisiones de tribunales o reformar leyes indistintamente, porque su fuente de poder es Dios y la soberanía le llega por un derecho divino.

Una de las más importantes tareas que sobrevino con el descubrimiento de América fue la adaptación del Derecho español. La ley, trasplantada de Castilla, adaptada al Nuevo Mundo, elaborada por juristas, es dictada por el rey quien se preocupa por ordenar la sociedad hispanoamericana con su sello jurídico. Todo esto viene conectado con el concepto abstracto sobre la legitimidad del poder de los reyes españoles sobre América. El derecho español, aplicable a este expediente que vamos a analizar, en buena parte venía del Corpus Iuris Civiles de Justiniano, desarrollado durante la edad media como el *ius commune*, pero este no reconocía capacidad jurídica sobre pueblos paganos, por eso la legitimación nace en virtud de la potestad dada por el Papa. De tal manera, era difícil armonizar el material legislativo en un conjunto coherente de fechas dispares y concepciones doctrinales diversas. En la América colonial no existían códigos sino compilaciones y recopilaciones. Trabajos como los de Juan Solórzano Pereira² y Pedro Murillo Velarde³ son esfuerzos dignos de contraste de las doctrinas del *ius*

² Juan de Solórzano y Pereyra (1575-1655). Jurista español, el más destacado publicista del derecho indiano. Estudió en Salamanca, donde se graduó en 1599. Por la real provisión del rey Felipe III, en 1609 se le otorgó el título de oidor de la Real Audiencia de Lima. En 1611 el Virrey del Perú, lo designó como gobernador y visitador de las minas de Huancavelica. A su regreso volvió a desempeñarse como oidor de la Audiencia de Lima hasta 1626, al año siguiente fue designado fiscal del Consejo de Hacienda, poco después como fiscal del Real y Supremo Consejo de Indias, pasando a ser miembro consejero de este real órgano en 1629. En 1640 el rey Felipe IV le concedió el hábito de Caballero de la Orden de Santiago y además el título de Consejero del Supremo Consejo de Castilla, cargo que ejerció en calidad de honorario debido a su progresiva sordera, enfermedad que a la larga lo jubiló. Juan Carlos Agulla. *El Derecho y las Ciencias Sociales: Dos libros de homenaje a sendos historiadores del derecho*. (Revista de Historia del Derecho Ricardo Levene. Número 29. Buenos Aires, 1992).

³ Pedro Murillo Velarde y Bravo (1696-1753) fue un religioso jesuita, gran jurista, historiador, geógrafo, poeta, político y orador, músico, y misionero español. El *Cursus juris canonici*,

commune encuadradas en el conjunto institucional del sistema jurídico de la política indiana, son textos que nos van a guiar a través del estudio del expediente y los motivos de sus posibles decisiones.

En los asuntos regulados por el derecho civil, la principal fuente legislativa real aplicada en las Indias eran Las Siete Partidas⁴. Se desarrolló un sistema jurídico que estaba enmarcado dentro de una exagerada proliferación de normas jurídicas y un tratamiento casuístico de la ley. Por las continuas reformas acompañadas de recopilaciones y codificaciones se hacía complicada la aplicación de las leyes para un caso determinado y fomentaban el incumplimiento de las leyes; caso aceptado institucionalmente, con la tesis prevista en las Siete Partidas: “se obedece pero no se cumple”. Las recopilaciones eran confusas, no contenían preceptos precisos y los argumentos y escritos no citaban con precisión la norma de por sí confusa, de tal manera que para las decisiones judiciales, como veremos en este caso, los jueces tenían discrecionalidad de interpretación a la hora de tomar sus decisiones.

La formación jurídica que tenían los abogados y que tenían los jueces, llevaba a los litigantes a razonar dentro de marcos conceptuales del *ius commune*. Las sentencias se dictaban conforme a lo que el juez conocía de derecho y este conocer estaba configurado o por la formación universitaria o, por las lecturas jurídicas que mayoritariamente eran de derecho común. Toda esta literatura jurídica es una proyección de Europa en el Nuevo Mundo adaptando situaciones a su propia doctrina para resolver los enigmas que entre juristas españoles y americanos formará un genuino sistema jurídico.

hispani et indici (Madrid, 1743) es una obra primordial para el estudio de las divergencias y similitudes entre la práctica judicial indiana y la castellana. El autor, perteneciente a la Compañía de Jesús, demuestra exhaustivos conocimientos sobre el derecho real, el canónico y el romano. Luis Díaz de la Guardia. *Datos para una biografía del jurista Pedro Murillo Velarde y Bravo*. Espacio, tiempo y forma, serie IV, Historia Moderna. (Michoacán, México, 2001). pp. 407-471.

⁴ Las Siete Partidas son una recopilación realizada por un grupo de juristas y expertos bajo la supervisión de Alfonso X “El Sabio” entre el 26 de junio de 1256 y el 28 de agosto de 1265; convirtiéndose en una de las obras más señaladas del derecho castellano al ser una síntesis de las leyes del reino y el derecho romano. Allan Brewer Carías. *Orígenes del Derecho Constitucional moderno en Hispanoamérica*. Colección Tratado de Derecho Constitucional. Tomo II. Fundación de Derecho Público. (Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2014).

MODALIDAD DE UN JUICIO DEL DERECHO COLONIAL. ¿PODÍA UN ALBACEA VENDER EL BIEN DE UN MENOR SIN AUTORIZACIÓN?

A.- El Expediente

La investigación de un expediente original, sobre un juicio en Caracas a finales del siglo XVIII, brinda una experiencia jurídica de necesaria revisión para la comprensión sistemática del derecho indiano aplicado y sus posibles interpretaciones para esa época. Este expediente contiene una querrela entre civiles con múltiples y complejos hechos jurídicos, así como también formas propias características de su momento. Como se ha indicado, para comprender mejor ese derecho colonial, en este artículo analizamos esas formalidades que circunscriben el escenario del foro judicial de la época.

Propio de su tiempo, el expediente es un torneo de documentos que giran alrededor de un testamento cerrado; las partes pretenden demostrar sus fuerzas probatorias con documentos que esgrimen sus argumentos. Toda la querrela está presentada en papeles sellados, ya sea en copias certificadas o en originales, debidamente transcritos y ratificados por los testigos y las autoridades competentes. Es un juicio que nace de un hecho jurídico que produce uno nuevo y que, en el tiempo, los derechos se cruzan y hasta se invalidan unos con otros. El punto central que se tomará para el análisis es una decisión judicial que requiere de la interpretación estrictamente legal de unas normas no codificadas en este punto en específico: la venta del bien de un menor hecho por el albacea:

“yo, Antonio Uzcategui vecino de esta ciudad de Santiago León de Caracas tutor y curador de la persona y bienes de Nicolás Perera clérigo consumado cargo que me ha sido discernido por la real justicia otorgue reconozco por esta presente carta que vendo y doy en venta a quién en su conviene saber una casa tienda de que le pertenece y posee en esta ciudad por el lado de Oriente tienda casa del dicho Nicolás de Pereda y por el poniente casa de Martín y por frente casa Real de por medio con casa de los herederos de Juan Pérez Bejarano y en el fondo consular de Isabel Pandora sotavento con todas las salidas piso y costumbre pertenencia y servidumbre

*cuántos hay a ver deben y les pertenecen de fuero y de otro de uso y de costumbre por libre”.*⁵

Constituye un silogismo jurídico de libre adaptación que, sin ser contrario a la ley, es decidido de manera aleatoria por el juez. Este procedimiento sigue las costumbres procedimentales que aplicaban justo antes de que se convirtiera en Capitanía General a la Provincia de Venezuela (1777), y antes de la instalación de la Real Audiencia de Caracas que fue el más alto tribunal judicial de apelación en las Indias, pues contó con jurisdicción civil y criminal y una amplia competencia extendida incluso al ámbito eclesiástico. Sobre la Audiencia sólo estaba el Consejo de Indias, al que únicamente se podía recurrir en los casos de mayor categoría.

a.- En el testamento, documento fundamental del juicio de nulidad, archivo que ahora se encuentra en la biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el causahabiente, Miguel Díaz Pereda le deja un inmueble a su sobrino, el menor Nicolás Pereda, como único y universal heredero con la condición sine qua non de que a los fines de poder disfrutar la herencia, a través de su tutor-curador, no se case. El testamento condiciona la entrega del bien legado a este menor, si permanece en estado civil de soltero:

“...con la condición de que no casandose los gosase por los días de su vida y dexificado su fallecimiento recayese la herencia de bienes en otros herederos como era constancia deel testamento ...le escribo en todas en papel con sello segundo y tercero fecha en Caracas en 1 de octubre de 1715 Miguel Díaz de Pereda en la ciudad de Caracas día del mes de octubre de 1715 ante el escribano público y testigo Miguel Díaz de Pereda vecino de esta ciudad a quien doy fe conozco y a mí están su entero juicio y sano juicio natural y me entregó este cuaderno de papel sellado con 12 puntadas de hilo blanco sobre cada una de ellas una banda y otra un de lacre colorado y dijo está su testamento y últimas voluntades y que con el llevará hecha acordé señalaba se cultura nombrando albacea constituido heredero...”. (Testamento de Miguel Díaz Pereda de fecha 1 de Octubre 1715, folio 68, cláusulas 22 y 24).⁶

⁵ Domingo Melo vs Sebastián Gabino Domínguez. 1760-1770. Expediente Judicial de juicio por nulidad de la venta hecha por el albacea sobre el bien de un menor. Caracas:s.e., 1760. 390 folios. Biblioteca ACPS. Expediente-00001.

⁶ Domingo Melo vs Sebastián Gabino Domínguez. 1760-1770. Expediente Judicial de juicio por nulidad de la venta hecha por el albacea sobre el bien de un menor. Caracas:s.e., 1760. 390 folios. Biblioteca ACPS. Expediente-00001.

En el referido testamento, encontramos que el testador Díaz Pereda, nombra al menor Nicolás Pereda único y universal heredero, pero en caso de la muerte de Nicolás, nombra como sustituto al hijo de su hermano, su sobrino Don Domingo Melo Pereda, y a falta de éste las hermanas de aquel, sus sobrinas. El menor Nicolás, cumple mayoría y toma los hábitos, asume su condición de heredero, pero muere el 30 de mayo de 1760. Siguiendo el orden sucesoral establecido, el sobrino del causante, el mencionado Domingo Melo, pasa a ocupar el puesto de heredero, todo según las disposiciones testamentarias. Aquí nace el proceso judicial, a mediados del año 1765, patrocinado por el representante legal, Don José Álvarez de Ávila⁷, quien inicia una acción de nulidad por la venta de la referida casa tienda, fundamentando su acción en la carencia de facultades que el albacea tenía para vender el bien del menor. De tal manera, pide se anule la venta y se devuelva la cadena de traspasos hasta que llegue al origen.

Efectivamente, para el momento de la apertura de la sucesión, todavía el beneficiario, Nicolás Pereda, era menor de edad. Este menor tenía como albacea, tutor y curador a Don Antonio de Uzcátegui. Esta figura del Albacea, en nombre y representación de Miguel Díaz Pereda, sería el encargado de cumplir las instrucciones, vale señalar: su última voluntad. Es una posición que lo coloca equivalente a la que estaría el testador siempre y cuando sus facultades no vayan contra la ley.

Por medio del testamento de Miguel Díaz Pereda, el testador, se le conceden al mencionado albacea, facultades amplias, típicas de los documentos de esa época, para la sustitución de voluntades como persona de confianza seleccionada por el testador de quien se espera cumpliera sus labores de la misma forma en que las hubiese cumplido el que las encomienda. En este

⁷ Juan Álvarez de Ávila, o Juan de Ávila, "...de lo comprendido entre el alto de Papelón, las quebradas del Cuño (o de Las Barrancas) y la Quebrada Chacaíto, hasta la cumbre «donde se avista el mar», es decir, todo el cerro del Ávila, o mejor, «de Ávila», que se llamó así por pertenecerle, este señor fue el que impulso la explotación comercial de los cultivos de café en toda la región, repartiendo los almácigos de café dentro de sus familiares y conocido. Al morir Ávila a fines de 1795, el menor de sus hijos varones. Domingo de Ávila, heredó «el potrero y la serranía del cerro de Ávila», que luego vendería en parte al señor Juan Manuel Matamoros y a su hermano Fernando Antonio de Ávila. Como era de todos reconocida esta posesión de los hermanos Ávila, de allí que la gente se refiriera a la cumbre más próxima a la pequeña Caracas de entonces como «cerro de Ávila», expresión que comenzó a usarse en la segunda mitad del siglo XVIII". Bruno, Manara. *El Ávila. Biografía de una montaña*. (Monte Ávila Editores. Caracas, 1998).

sentido, nos ilustra el famoso jurista del derecho indiano Pedro Murillo Velarde, cómo se debían redactar las cláusulas que estaban contenidas en los testamentos. En su recolección incluye el siguiente ejemplo suficientemente generalizado:

“It. Mando, que de lo más bien parado de mis bienes se separen mil pesos, y quanto antes se entreguen a N. mi confesor, o a N. mi Albacea, para que con ellos execute lo que debaxo de secreto lo dexo comunicado para descargo de mi conciencia, sin que persona, o juez alguno Eclesiástico, o Secular le pueda en lo judicial, y público pedir cuenta de dicha cantidad; y solamente quiero que el señor Juez de Testamentos, o Prelado Eclesiástico competente, le pueda pedir que debaxo del mismo sigilo muestre mi disposición, para que le conste haberla cumplido, y poner Auto, en que declare estar cumplida, sin otra expresión”⁸.

De tal manera, el testamento al cual nos referimos, tiene mucha similitud con este modelo, redactados al estilo plantilla donde era rellenado con los bienes o peticiones específicas de cada testador. En nuestro caso, es un testamento cerrado que tiene diferencias en los efectos que uno abierto:

“...Miguel Díaz Pereda que en él se declaran nombrados herederos sepultura y albaceas y que no se abriese ni publicase hasta después de su fallecimiento y que en el momento del otorgamiento estaba en su entero y sano juicio porque lo vio hablar conservadoramente y el hecho su firma y de las de los demás testigos que firmaron en presencia del declarante”⁹.

A las secuencias de esta discusión, va a ser un elemento valioso a la hora de determinar la amplitud del albacea en el campo de acción del albaceazgo en función de preservar y mantener el valor de los bienes legados al menor.

El punto neurálgico de la acción es que el albacea decidió vender la casa tienda del menor. Ahora bien, independientemente de la capacidad de actuar que pueda atribuírsele a un albacea en el derecho colonial durante el siglo XVIII, surgen varias preguntas:

⁸ Pedro Murillo Velarde. *Curso de Derecho Canónico Hispano e Indiano, Titulo XXVI, Testamento y últimas voluntades*. 337. (Madrid, 1743).

⁹ Domingo Melo vs Sebastián Gabino Domínguez. 1760-1770. Expediente Judicial de juicio por nulidad de la venta hecha por el albacea sobre el bien de un menor. Caracas: s.e., 1760. 390folios. Biblioteca ACPS. Expediente-00001.

i) ¿Estaba dentro de sus facultades la capacidad para realizar esta venta? En el derecho moderno, la venta del bien de un menor, hecha por el albacea, está uniformemente regulada en el continente americano que heredó el sistema jurídico colonial español. Hay normas específicas que regulan y definen las facultades legales del albacea. Por ser objetos de tutela los bienes de los menores y por prestarse a innumerables abusos de parte de los administradores frente a un débil jurídico, los legisladores han legislado prescriptivamente, de manera celosa y uniforme, una regulación ocupada de la debida protección. Además de la jurisprudencia reiterada que consagra que para la venta del bien del menor, tiene que haber -previamente- autorización judicial, so pena de nulidad absoluta; de no ser autorizada se convierte en además de nula, en imprescriptible. No se puede vender por poder aunque sea amplio o específico en cuanto a esa facultad. Las decisiones de los tribunales latinoamericanos están contestes en la misma línea: Un bien de una sucesión no puede ser enajenado por el albacea sin la autorización judicial que prescribe la Ley, bajo pena de nulidad absoluta si lo hace contrariando tal disposición.¹⁰

ii) ¿Es el texto de este testamento suficientemente amplio para ello? Pareciera que la escritura hace concesiones de carácter general sobre amplias facultades para disponer en favor de los intereses del menor, pero no hay ninguna especificidad que confirme poder para la venta.

iii) ¿No tiene que consultar con el menor, con otros familiares o con la autoridad competente antes de realizar la operación? Asimismo, para la venta de cualquier bien de la masa hereditaria tiene que haber consentimiento previo de los herederos. Solo puede el albacea vender por disposición expresa, apegado siempre a cumplir la última voluntad del testador, y la excepción sería solo si el dinero hace falta para satisfacer las obligaciones del funeral, legados o deudas pendientes.

¹⁰ Una jurisprudencia interesante versa sobre un procedimiento de autorización para vender como requisito previo a la oferta. La parte recurrente, que actúa en su carácter de albacea testamentaria designada por el de cujus a favor de su hijo menor, apeló de la decisión al negársele la solicitud de autorización judicial para vender el inmueble, hasta tanto se cumplan las condiciones que fueron previstas en el documento testamentario y el menor, pueda tener disposición plena de los bienes y derechos dejados a través de la herencia. Razón esta por la cual le niegan la autorización para vender el inmueble. Corte Superior Segunda del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, sentencia del 28-07-2008.

iv) ¿Quién y cómo se administra el dinero pagado en efectivo? El producto de la venta debería ir a un fideicomiso, pero a pesar de que el contrato de fideicomiso nace en el medio evo, era una figura mas conocida en el derecho anglosajón; el pago declarado por el vendedor, que lo recibe en monedas de plata, no se hace ninguna referencia dentro del expediente sobre cual fue su destino. No sabemos si se le guardo en efectivo o si se invirtió en otro activo, pero lo cierto es que nunca durante el litigio se hace mención alguna sobre el destino de estos fondos.

v) ¿Cómo se protegen los menores en el derecho colonial frente a los exabruptos de sus guardianes? En el derecho colonial había pocas consideraciones hacia los menores. Básicamente se regulaban los niños abandonados y los niños criminales en función de las imputaciones por las edades, pero por todo lo demás se aplicaba el *ius commune*.

vi) ¿Puede el menor, cuando llega a mayor, impugnar la venta y pedir la restitución del inmueble vendido? Cuando un menor tutelado llega a la mayoría de edad o a la emancipación, puede impugnar la venta y pedir cuentas de las actuaciones de su albacea. Este es un argumento que utiliza el demandado. Insiste en autos que llegando a la mayoría, Nicolas Pereda nunca reclamó ni opuso resistencia a las actuaciones hechas en su nombre, lo que para el demandado es un acto de convalidación que ratifica la decisión del albacea en la venta del inmueble de su tutelado.

b.- Otro documento fundamental es el de la compraventa hecha por el albacea. En este, el vendedor declara que lo hace a nombre de un menor del cual es su tutor y curador; confirmando, tanto la minoría de edad de su representado como su condición de representante. Da en venta la casa tienda que el menor ha heredado y que, por testamento, entiende que tiene plenas facultades para hacerlo. Asume todas las responsabilidades, asegurando que no hay hipotecas o gravámenes sobre la propiedad. Declara que el precio es referencial del valor el cual recibe de contado, en plata acuñada en reales de a ocho, delante de los testigos. Igualmente, se compromete en nombre de su menor a sanear cualesquier vicio que existiese. Expresa el documento:

“...y quita de todo empeño censo por ni deuda ni por precio y cuantía seiscientos reales de a ocho que por compra y en pago dela casa tienda y su Solar me ha dado y pagado y del dicho comprador he recibido

*dinero de contado en plata acuñada y corriente a mi satisfacción y voluntad doy fee por haberse hecho en presencia del excelentísimo notario público intestado y testigo de esta carta de cual entrega y recibo ya el otro doy fee por haverse hecho en mi presencia y de dos testigos y de dicha casa tienda que pertenece al dicho menor Don Nicolás Pereda por haverla heredado de Miguel Díaz de Pereda difunto que la compro de Luisa vecina que fue de esta ciudad como pareciera de la escritura de la venta que ella confirió en esta ciudad de Caracas el 14 de marzo de 1726”.*¹¹

c.- El avalúo de la propiedad, es otro documento interesante el cual, además de tener que cumplir las formalidades para poder ser válido, arroja un precio de 600 pesos¹². Es un valor comparativo de mercado para las propiedades existentes en ese tamaño y en esa zona de la parroquia catedral. La Caracas de mediados de los setecientos, tenía un aproximado de 20.000 habitantes en 130 manzanas de 150 varas cada una con 8 Alcaldes de Barrio. Con 4 parroquias, la parroquia catedral tenía un aproximado de 8.500 habitantes dentro de unas 48 manzanas, en oriente 535 propiedades y en poniente 486¹³. El valor de 600 pesos, es importante porque el monto demuestra que no hubo intención de defraudar el valor patrimonial sucesoral. Las razones de la venta pueden estar vinculadas al costo del mantenimiento del inmueble y las dificultades de pago que podría tener un propietario sin ingresos, considerando que las construcciones en Caracas se hacían de materiales perecederos que en el tiempo sufrían desgastes irreparables. En todo caso, el valor del inmueble es un valor mercado y no se menciona en ninguna etapa del juicio ni siquiera la presunción del mal

¹¹ Domingo Melo vs Sebastián Gabino Domínguez. 1760-1770. Expediente Judicial de juicio por nulidad de la venta hecha por el albacea sobre el bien de un menor. Caracas: s.e., 1760. 390folios. Biblioteca ACPS. Expediente-00001.

¹² como referencia tenemos que un peón ganaba 3 reales por día de trabajo (a valores de hoy aproximado de 7,5 euros al mes), un Oidor ganaba 275 pesos al mes y un esclavo valía 200 pesos. Un dólar español (un peso) consistía de ocho reales, cada real valía 34 maravedís. A valores de hoy 1 maravedí aproxima a 10 céntimos de euro y en equivalencias: Un Real (34 maravedís) 3,4 euros, un Peso (272 maravedís) 27,2 euros, un Ducado (375 maravedís) 37,5 euros y un Escudo (unos 400 maravedís) 40 euros. El Camino Español. *Los Capitanes de los Tercios eran mileuristas*. 2021. <https://www.elcaminoespañol.com/la-epoca/215-los-capitanes-de-los-tercios-de-flandes-eran-mileuristas/>

¹³ Celia Tacoronte. *La Parroquia Catedral de Caracas y sus pobladores. Un estudio a partir de la Matrícula de 1787*. (UCAB. Caracas, 2017).

uso o abuso en el destino de este dinero. Esto hubiese sido un alegato con mucha fuerza, si se hubiese solicitado una rendición de cuentas por parte del menor llegando a la mayoría de edad.

De tal manera, el nuevo propietario Sebastián Gabino Domínguez, decide vender la tienda que había adquirido ante el notario público el día 14 de marzo de 1726, aproximadamente diez años después de la fecha de ser otorgado, a Juan Thellez de Silva y Thellez quien a su vez vende a Rafael Cordova y Berde, ocupante de la casa tienda al momento de iniciarse el juicio. Cordova muere en el transcurso del proceso y queda como propietaria su viuda, Maria Trinidad Castro de Córdoba. De este inmueble se consignan copias certificadas de documentos que lo acreditan como propiedad del testador ya que lo había adquirido de Luisa Cathalina de Tovar.

Sebastián Gabino Domínguez, como primer vendedor, es el demandado. Se le pide que responda en todo caso de su obligación de sanear, que se restituya el valor a quien corresponda. Presenta los escritos y diligencias de contestación de la demanda en su propio nombre, con sus firmas y rúbricas, no tiene un representante del estilo de asesor jurídico que se usaría una vez instalado el Colegio de Abogados de Caracas. Sin embargo, el 8 de julio 1769, consigna un poder a nombre de Mathias Chartie para que lo represente como procurador. Es interesante observar lo alegatos y sus fundamentos, contenidos en el expediente, los cuales abarcan un amplio espectro de herramientas que oponen en buena lid las pretensiones del demandante. Primeramente; contesta la demanda sosteniendo que el albacea estaba en plenas facultades para vender, pero se va al alegato de la posesión, de la buena fe, del justo título y del dominio pacífico que han gozado los propietarios derivados de la venta por un período de tiempo suficiente sin que el supuesto afectado hubiese hecho nada al respecto. Segundo; usando el requisito de los lapsos, asoma la posibilidad de usucapión, afirma que la prescripción adquisitiva aplica ya que concuerdan lo derivado del dominio y la posesión de buena fe conjuntamente con el tiempo pasado. Tercero; añade el hecho de que el propietario ni su albacea nunca se interesaron por la propiedad con ánimo de dueño, nunca revisaron los términos ni los cánones de los arrendamientos mientras la propiedad estuvo arrendada, tampoco se hicieron parte en un juicio que intentó un vecino por servidumbre sobre el derecho de las aguas y que fue bastante notorio.

El demandante atento a los avances, en varias diligencias, pide a la autoridad que se condene al demandado por retraso en las actuaciones en el

juicio. Por las coletillas estampadas al final de los folios podemos observar que las actuaciones plasmadas en papel sellado, contienen traslados a las direcciones de los diferentes actores. Estas notificaciones en persona, se entienden como fórmulas procesales de notificaciones para poner en autos a las partes y avisarles formalmente cuando están corriendo los lapsos para sus ejecuciones. En ocasiones, el demandante estampa una diligencia reclamando por la falta de actuación de la parte contraria y la acusa de rebeldía. El demandado, a su vez, insiste que esa demanda está desnuda de pruebas.

Esta acción se activa sobre la base de un testamento que tiene un menor como heredero con un albacea de tutor quien decide vender el inmueble y que no es reclamado por el menor cuando llega al mayorazgo; jurídicamente es un caso, de por sí, interesante. Ahora, que este mismo caso sea llevado a la solicitud de nulidad de la venta por parte del próximo heredero y que involucre una cadena de traspasos que implican una tercería sobre la titularidad del último propietario, lo hace mucho más complejo aún. Se le suma un lapso de tiempo muy largo comprendido entre la fecha en que se otorga el testamento, los diez años que pasan hasta la primera venta y los treinta que pasan hasta que se inicia la pretensión por vía judicial. Pero el juicio como tal; considerando los amanuenses, la falta de papel y tinta, la viruela que dejó mil muertos en 1764¹⁴, el terremoto que justamente azotó la ciudad de Caracas en el año 1766, los términos de la distancia y la posibilidad de no responder los actos dentro de los lapsos sin ninguna consecuencia inmediata, nos demuestra que es un juicio de muy buenos criterios jurídicos, en consonancia con lo que vamos cotejando del derecho indiano aplicado en la provincia y de un procedimiento bastante ajustado para las circunstancias. En la

¹⁴ En el siglo XVIII la viruela se hizo endemoepidémica; la epidemia más larga y grave ocurrió en la década de 1760; durante el solo año de 1764 causó más de 1.000 muertes en Caracas, autores señalan de 6.000 hasta 8.000 víctimas en la capital. Caracas fue prácticamente abandonada, dispersándose sus habitantes por los campos vecinos. Diversas enfermedades también hicieron estragos en la ciudad de Caracas: paludismo, fiebre amarilla y la peste bubónica; no eran menos importantes el sarampión, la tuberculosis, el tabardillo, las bubas, el bocio, la rabia y la tosferina. Los brotes de fiebre amarilla que se presentaron en la ciudad entre 1756 y 1757 diezmaron las tropas españolas acuarteladas en la misma, y en 1764 la viruela produjo 1.000 muertes. Fundación Polar. *Diccionario de Historia de Venezuela*, tomo 2, (Editorial Ex Libris. Caracas, 1998). p. 68.

sentencia, es donde encontramos una interpretación propia del juzgador que definitivamente choca contra la evolución del derecho moderno, específicamente, para la venta del bien de un menor. Es una sentencia que no está explícitamente motivada y asumimos que las facultades amplias del Gobernador no necesitaba mayores explicaciones escritas para resolver asuntos de este tipo.

B.- Derecho Colonial y Derecho Contemporáneo

a.- Hasta algunos detalles no llegaba el derecho castellano, ni por leyes de Indias ni por Ley Real. Si bien es alegado por el demandante que la Ley Real contiene una “Partida sobre la enajenación de bienes del menor”, no se desarrollan premisas en este proceso que puedan encajar con la referida normativa a los fines de cuál era su contenido. Los litigantes podían referirse a las numerosas y desordenadas recopilaciones que existían en los fueros, también podían citar doctrinarios en sus escritos, pero el juez no estaba obligado por esto. Así como el rey podía contradecir una ley o cambiar una sentencia, el juez podía tomar decisiones que él consideraba estaban ajustadas, según su real entender, a algún derecho. Lo mas que le quedaba al desfavorecido por la decisión era apelar ante la autoridad superior.

En relación a este juicio y el derecho colonial, podemos considerar que a la hora de la decisión, el Juez probablemente tomó en cuenta lo que contenía el testamento, en un texto muy al estilo del mencionado modelo de Murillo Velarde; de su transcripción señala:

“...Declaro haver entregado a mis albazeas una memorias firmada de mi mano con fecha de este día en que les prebengo y ordeno diferentes cosas que tengo por combeniente se executen, en la forma y manera que allí les prebengo y porquemi voluntad es dejarles la confianza paraquelo executen en descargo de mi conciencia. Ordeno y mando no seles tome ni pida cuenta de ello en manera alguna por ningún Juez Secular ni eclesiástico aunque sea por razón () deeste testamento y lo enel dispuesto porque esta materia y execucion delo contenido en la memoria, solo la confío y dexo a disposición de mis albazeas, sin obligación, ni limittación, ni cargo alguno por la confianza que hago de los () se cumpla y execute precisa y puntualmente sin que se les obligue a hacer obligación ni dar fianza alguna el seguro delo contenido enla

*memoria caudal y bienes que tomaren para su cumplimiento de cuya obligación y fianza caso que la deviesen dar les relevo” 1 de octubre de 1715, Gaspar Joseph de Salas, escrivano publico.*¹⁵

Es posible que el árbitro llegase a una interpretación amplia que refleja en la sentencia. Era común que entre el juez y sus asesores letrados hayan considerado una interpretación progresiva del mandato. Las formas eran generalizadas en los testamentos y el juez que conocía el derecho debía estar familiarizado con las venias de las instrucciones testamentarias. A pesar de que el testamento de Díaz Pereda no se extiende suficientemente en el texto para abarcar las mas amplias facultades del albacea, se presta para una interpretación extensa de lo que se estilaba y se pretendía dejar plasmado en esos instrumentos a los efectos de que los vivos pudiesen tomar las acciones relacionadas al mandato.

El sentido para el executor, era cumplir de manera genuina la última manifestación de voluntad del causahabiente. El ejemplo que sigue, es el contenido que le falta al testamento de Díaz Pereda y que era una forma común en el derecho indiano y un modelo general en la elaboración de testamentos:

*It. Dexo por testamentarios, Albaceas, y Executors de mi testamento, a N. N. y a los cuales, y a cada uno de ellos in solidum **Doy todo mi poder quan bastante de Derecho se requiere, para que puedan entrar, y entren en todos mis bienes, y los vendan, y rematen en pública almoneda, como más juzgaren convenir, para que cumplan lo contenido, y dispuesto en este mi Testamento, y les doy facultad para que puedan substituir en sus oficios, y subrogar otros en su lugar, que lo lleven a debida execución, a los cuales desde luego les doy la misma facultad, y potestad, que a los dichos***¹⁶. **(Negrillas nuestras)**

Sin perjuicio de que la parte ut supra no se le haya incorporado al testamento de Díaz Pereda, se debe haber entendido por el juzgador como integral del mismo. Lo asume como un poder amplio, preciso y sin

¹⁵ Domingo Melo vs Sebastián Gabino Domínguez. 1760-1770. Expediente Judicial de juicio por nulidad de la venta hecha por el albacea sobre el bien de un menor. Caracas: s.e., 1760. 390 folios. Biblioteca ACPS. Expediente-00001.

¹⁶ Pedro Murillo Velarde. *Curso de Derecho Canónico Hispano e Indiano*, XXVI, Testamento y últimas voluntades. 337. (Madrid, 1743).

restricciones, siempre y cuando no fuese contrario a la ley y fuese a favor de los herederos. De no ser así, la decisión de Don José Solano y Bote¹⁷ hubiese sido favorable a las peticiones del demandante. Sin embargo, se consideraba en la doctrina colonial indiana como válida la sentencia dictada contra el derecho del litigante y contra los méritos de la causa, si no era notoriamente injusta ni se expresaba en ella un error contrario al derecho, porque en el caso de duda se presumía a favor del juez.

A tales efectos nos ilustra de nuevo el maestro Murillo Velarde: “El juez, para pronunciar la sentencia, no debe proceder con voluntaria precipitación, que es llamada la madrastra de la justicia, sino con madura discreción, que es denominada la madre de las virtudes. Nada vindique el odio, ni el favor usurpe, ni el temor imponga, no trastoque la justicia el premio o la expectativa del premio, sino que lleve en las manos la balanza, equilibre los platillos con igual peso, tenga a Dios ante los ojos en todas las cosas”¹⁸. Complementa el historiador del derecho venezolano, Rogelio Pérez Perdomo, señalando que: “Los escritos y alegatos de abogados y las decisiones judiciales no han sido estudiadas sistemáticamente, pero en lo que hemos visto, las citas de legislación son pocos frecuentes y los jueces se sentían autorizados a apartarse de sus preceptos cuando los consideraban inconvenientes”¹⁹.

b.- Si se hubiese anulado la venta hubiese implicado que corrieran los lapsos para la prescripción adquisitiva y la sentencia hubiese pedido, a la cadena de compradores y vendedores, la restitución al estado de la primera venta. De tal manera y en el supuesto negado que hubiese prosperado la nulidad de la venta, los alegatos de la defensa, suscritos por el demandado, no hubiesen tenido validez ninguna. A la final, paradójicamente, estos son los alegatos que le dan el fundamento para que se produzca la usucapión.

¹⁷ Joseph de Solano y Bote Carrasco y Díaz, Márquez del Socorro (1726-1806), militar y político español. Llegó a ser Brigadier y Capitán General de la Real Armada Española, Gobernador de la Provincia de Venezuela, Capitán General de Santo Domingo y Consejero de Estado, tuvo fama de gobernante justo y respetado. Fundación Polar. *Diccionario de Historia de Venezuela*, tomo 3, (Editorial Ex Libris, Caracas. 1998). pp. 627-628.

¹⁸ Pedro Murillo Velarde. *Curso de Derecho Canónico Hispano e Indiano, XXVII*, Sentencia y Cosa Juzgada, 257. (Madrid, 1743).

¹⁹ Rogelio, Pérez Perdomo. *Ideas del Derecho y Cultura Jurídica en Venezuela*. (Universidad Metropolitana. Caracas, 2017).

Una parte importante de su defensa, está basada y así lo alega por escrito en el precepto latino: “Quilibet preasumitur bonus donec contrarium probatur”, la parte contraria no ha probado la mala fe. En rigor, deja registrado de manera reiterada que la posesión ha sido disfrutada con dominio, con justo título, de buena fe y con ánimo de propietario. Pero estos fundamentos no hubiesen sido suficientes por encima de una decisión de nulidad. Nuevamente señala Murillo Velarde: “Como en derecho se presume la ignorancia, cuando no se prueba el conocimiento, y la buena fe consiste en la ignorancia, por la cual alguno ignora que una cosa es ajena, y por consiguiente juzga que es propia, de allí es que la buena fe se presume; y por lo tanto el que objeta mala fe debe probarla. Los requisitos para la prescripción estaban contenidos en estos versos: 1. Sea la cosa apta. 2. Haya buena fe. 3. Sea justo el título. 4. Justa la posesión. 5. Y completo el tiempo de ley.”²⁰

En consecuencia, la sentencia declara que el demandante Don Domingo Melo no ha probado su acción y demanda. Por el contrario, Don Sebastián Gabino Domínguez ha justificado sus excepciones quedando absuelto y se restituye la posesión a los herederos de Raphael Córdoba y Berde, condenando en costas a la parte perdedora.

c.- Cuando la sentencia valida la venta del albacea, perfecciona el contrato y los trasposos sucesivos de la propiedad. Solución inédita del derecho indiano que hace que los demás hechos jurídicos, sean soluciones simples y ancestrales de ese derecho romano que fue absorbido por las leyes castellanas, con las variantes que en el tiempo podrían haber suscitado por los efectos de las aplicaciones de las costumbres de las Indias. El administrador colonial de las cosas podía vender libremente a no ser que la ley prohibiera especialmente a ciertas personas no hacerlo. Así como habían cosas que estaban prohibidas venderlas como serían cosas del dominio público o de la Iglesia.

C.- Evaluación del sistema colonial

a.- El acceso al aparato judicial en una sociedad de castas, como era la de la Caracas del siglo XVIII, no era fácil ni posible sino para un grupo

²⁰ Pedro Murillo Velarde. *Curso de Derecho Canónico Hispano e Indiano*, XII, De la causa de la posesión n y de la propiedad, 374. (Madrid, 1743).

privilegiado que estaba encargado de dirimir conflictos y contradicciones existentes en esa sociedad jerarquizada y que algunos autores consideran era discriminatoria para los criollos²¹. Este juicio a que nos referimos, ocurrió antes de que existiera la Real Audiencia de Caracas. Tenía otra Audiencia que aprobar el ejercicio de la abogacía de conformidad con las exigencias que pedía la corona española para sus provincias²². Aunque el derecho era una carrera en la Universidad Pontificia de Caracas desde 1721, no existía aún el Colegio de Abogados y de cualquier manera la abogacía era una profesión de élites y una carrera costosa. El primer código de procedimiento civil no fue promulgado hasta mediados del próximo siglo; aunque existe un ensayo de Gonzalo de Rioja que data de 1753, este no estaba disponible para los efectos de este juicio; por lo tanto, el derecho indiano seguía unas pautas tratando de imitar las fórmulas de los procedimientos ejecutados en la península.

En el caso de nuestro expediente, tenemos una querrela incoada de manera formal por el demandante con pretensiones válidas y a discutirse. Tenemos un ente receptor que le da curso al proceso e impulsa el procedimiento de acuerdo a las normas aplicables. El demandado tiene la oportunidad de contestar y alegar su defensa. Abierto el lapso de pruebas se producen numerosos instrumentos que soportan los alegatos de ambas partes como son: el testamento, poder para testar, fe de bautismo para probar la legitimidad de los pretendientes, copia certificada de los documentos de propiedad de la casa tienda, copia certificada de los documentos de compra-venta de la casa tienda, inventarios, avalúos y poderes de representación.

Durante el proceso, nutrido de suficientes diligencias, se insta a la autoridad para que condene a costos y costas a la parte perdedora ya que no fueron demostrados según cada uno de ellos, dentro del lapso probatorio, las excepciones o defensas. Igualmente, solicitan que a ambas partes sean

²¹ Ali Enrique López Bohórquez. *Los Ministros de la Audiencia de Caracas (1786-1810)*. Caracterización de una elite burocrática del poder español en Venezuela. (ANH. Caracas, 1984).

²² Para optar a los estudios el aspirante tenía que ser blanco, hijo legítimo, cristiano, bachiller y hacer una pasantía. Para graduarse tenía que dictar 10 lecciones de 30 minutos cada una; escoger un tema para presentarlo y defenderlo; pasar “las tremendas” que era exponer un tema escogido al azar; ir a una Real Audiencia presentar todos los recaudos y superar la prueba académica. Mario Briceño Perozo. *Los abogados en la Colonia*. (Archivo General de la Nación. Caracas 1965).

notificadas oportunamente y estas, recíprocamente, se acusan de rebeldía en relación a la tardanza para completar los lapsos procedimentales. Es curioso resaltar que en repetidas ocasiones las partes solicitan una copia certificada de la diligencia presentada, práctica común hasta nuestros días, a los fines de poder demostrar su existencia en el caso de alteración fraudulenta del expediente. En la presentación del documento original de compraventa que hace el albacea, el demandado pide se le certifique una copia y le devuelvan el original por falta de acceso al registro de origen.

b.- La tercería, que propone el propietario ocupante de la casa tienda al momento del juicio, es un evento jurídico que paralizaría el juicio principal hasta la resultas de esa incidencia. Esta no prosperó. Se activa cuando el demandante le pide al juez que: “*se mande a cerrar y se suspendiese cualesquiera fábricas al expropiado*”. Además de un derecho legítimo es una estrategia procesal utilizada por el afectado como defensa de su derecho de posesión y en resguardo de su núcleo familiar, por eso el demandante alega que: “*es una acción artificial, maliciosa y dilatoria para sacar el cuerpo a la atención de un juicio separado*”.

c.- Finalmente, la sentencia es dictada el 6 de agosto de 1770 y abre el camino para que el demandante, en este caso su representante José Álvarez de Ávila, active la revisión ante una instancia superior. A tales efectos, consigna la nota correspondiente donde declara que:

*“apelo deel de VS para ante los Sres Presidente y Oidores de la Rl Audiencia y Chansillería que reside en la Ciudad de Santo Domingo de Isla La Española o por ante con quien mejor otro pueda y desea. Por tanto y en tanto conforme avalúo los recursos de nulidad atentado agravio al relacionado por mi parte competan”*²³.

Esto demuestra una garantía procesal al poder llevar la decisión ante la máxima autoridad quien tendrá, a través del expediente, la manera de conocer los hechos, que estos sean revisados en derecho y dejar sus

²³ Domingo Melo vs Sebastián Gabino Domínguez. 1760-1770. Expediente Judicial de juicio por nulidad de la venta hecha por el albacea sobre el bien de un menor. Caracas: s.e., 1760. 390 folios. Biblioteca ACPS. Expediente-00001.

conclusiones en una sentencia definitivamente firme. Aunque es en este mismo año de 1770 que el Gobernador Don José Solano y Bote es nombrado Capitán General en Santo Domingo y Presidente de su Real Audiencia, no sería él el que revisara su propia sentencia: “*Y por esta razón si el juez a quo [del cual se apela] sucede en su lugar al juez ad quem [al cual se apela] no puede por sí mismo conocer de la causa de la apelación, si se opondre la parte adversaria, sino que debe delegar la causa a una persona no sospechosa*”²⁴.

El recurso de apelación es admitido a ambos efectos; en otras palabras, el recurso interpuesto produce el envío de las actuaciones al juez superior y suspende la inmediata ejecución de lo resuelto. Mientras, el apelante solicitó se le entregasen los autos originales lo que posiblemente hizo que llegaran a mis manos.

CONCLUSIONES

Hemos transitado por un proceso judicial complejo y nutrido en hechos y actos jurídicos, complementado con un procedimiento coherente. A lo largo de sus folios hemos encontrado apego a la ley, a las formas, y a las posibilidades de las partes de llevar a cabo un proceso justo dentro de unas reglas generalmente descritas.

Si bien es cierto que el derecho colonial estaba conformado de una compilación y recopilación de muchas leyes durante largos y diferentes períodos de tiempo, también es cierto que dominaba en la administración de justicia colonial un apego a esta costumbre y a los fueros que amparaban los procesos jurídicos.

La interpretación del juez para llegar a una solución justa y equitativa estaba respaldada en base a estas leyes coloniales y en los vacíos estaban orientadas por las decisiones de otros órganos jurisdiccionales que aunque no fuesen obligatorias eran comparativas, pero en este caso específico la facultad del albacea para vender el bien del menor es una interpretación propia que hace el juez del caso.

Desde nuestro punto de vista, la interpretación parece correcta puesto que el albacea ha debido disponer del bien por un eminente peligro a que

²⁴ Pedro Murillo Velarde. *Curso de Derecho Canónico Hispano e Indiano, XXVII*, Sentencia y Cosa Juzgada, 288. (Madrid, 1743)

pereciera la cosa o por generar unos gastos y costos de mantenimiento que escapaban de las posibilidades patrimoniales del propietario. No estando estrictamente obligado a previa autorización y seguramente, al igual que el juez, entendió amplísimas sus facultades en virtud del testamento. Si decidió vender por convicción de que no se encontraba en buen estado después de tanto tiempo de construido o por la imposibilidad del menor para mantenerlo en buen estado, sin tener otras fuentes de ingresos, estaba cumpliendo con la voluntad del testador y en consecuencia, sus instrucciones póstumas.

Al final hemos podido verificar un caso particular que nos da una idea general donde, además de la observancia de la ley y el apego a los procedimientos, se llega a una solución que independientemente de que después fuese regulada de manera contraria, nos brinda un acercamiento consecuente con un sistema jurídico colonial dónde, eventualmente, la ley imperaba sobre la anarquía y sobre las decisiones unilaterales del que controlaba el poder.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes primarias

Domingo Melo vs Sebastián Gabino Domínguez. 1760-1770. Expediente Judicial de juicio por nulidad de la venta hecha por el albacea sobre el bien de un menor.--Caracas: s.e., 1760. 390 folios. Biblioteca Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Solicite el material por este número: EXPEDIENTE-00001.

Murillo Velarde, Pedro S.J. *Curso de Derecho Canónico Hispano e Indiano*. (Madrid, 1743)

<http://revistaius.com/index.php/ius/article/view/323/669>

Fuentes secundarias

BRICEÑO PEROZO, Mario. *Los abogados en la Colonia*. Caracas, Archivo General de la Nación, 1965.

DÁVILA MENDOZA, Dora. *Ali López Bohórquez. El Rescate de la Autoridad Colonial en Venezuela. La Real Audiencia de Caracas (1786-1810)*. Caracas, Centro Nacional de Historia, Boletín ANH Número 372, 2009.

- FUNDACIÓN POLAR. Diccionario de Historia de Venezuela. Caracas, Editorial Exlibris, 1988.
- GONZÁLEZ ANTÍAS, Antonio. *Práctica Paleográfica. Notas para la transcripción de documentos históricos manuscritos y sumario de abreviaturas de uso frecuente*. (Caracas, Archivo General de la Nación). <https://es.scribd.com/document/367928367/Practica-Paleografica-Antonio-Gonzalez-Antias>. 2010.
- LÓPEZ BOHÓRQUEZ, Ali Enrique. *Los Ministros de la Audiencia de Caracas (1786-1810)*. Caracas, Boletín ANH, Número 174, 1984.
- MANARA, Bruno. *El Ávila. Biografía de una montaña*. Caracas, Monte Ávila Editores, 1998.
- PÉREZ PERDOMO, Rogelio. *Ideas del Derecho y Cultura Jurídica en Venezuela*. (Caracas, Universidad Metropolitana) <http://www.unimet.edu.ve/unimetsite/wp-content/uploads/2018/02/Ideas-del-Derecho-y-cultura-jur%C3%ADdica-en-Venezuela.pdf>. 2017.
- TACORONTE, Celia. *La Parroquia Catedral de Caracas y sus pobladores. Un estudio a partir de la Matrícula de 1787*. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2017.